



Columna



Cristian Rodríguez
Director IPP UCN

Gobernar la polarización

El nuevo ciclo político abre un escenario cada vez más frecuente en las democracias contemporáneas: un gobierno central y gobiernos regionales de distinto signo político obligados a convivir, decidir y ejecutar políticas públicas en un contexto de alta polarización. El problema no es la diversidad de proyectos, sino qué ocurre cuando esa diversidad se traduce en bloqueo, fragmentación o competencia improductiva.

Los desafíos que enfrentan territorios como Antofagasta –inmigración, delincuencia, minería, acceso a servicios– son problemas persistentes, interdependientes y políticamente sensibles. Pretender resolverlos desde la lógica del “quién manda” o del “quién gana” suele conducir a soluciones parciales, cortoplacistas o derechamente fallidas. En contextos polarizados, gobernar exige algo más exigente que imponer una visión: exige capacidad para coordinar bajo desacuerdo.

La inmigración es un ejemplo claro. Su gestión involucra control fronterizo, inserción laboral, servicios sociales, convivencia urbana y seguridad. Ningún nivel de gobierno tiene por sí solo todas las herramientas, ni toda la información. Cuando el debate se reduce a consignas –apertura versus cierre– se pierde de vista lo esencial: cómo diseñar arreglos institucionales que permitan respuestas diferenciadas, basadas en datos, con responsabilidades claras y mecanismos de evaluación. La coordinación no elimina el conflicto político, pero lo canaliza hacia decisiones operativas.

Algo similar ocurre con la delincuencia. La demanda ciudadana es inequívoca: resultados. Pero la seguridad no se resuelve solo con más

recursos o discursos más duros. Requiere articulación entre prevención, control, justicia y políticas sociales, muchas de las cuales se implementan a nivel local o regional. En un escenario de gobiernos de distinto signo, la tentación es usar la seguridad como arma política. El costo de esa estrategia no lo paga el adversario, sino la ciudadanía. Gobernar implica separar la disputa simbólica de la gestión efectiva.

La minería, particularmente en regiones como Antofagasta donde estructura la economía y la identidad territorial, añade otra capa de complejidad. Aquí confluyen intereses nacionales y regionales. Cuando no existe alineamiento político, el riesgo es doble: o se centralizan decisiones para “ordenar” el sistema, o se fragmenta la gobernanza en múltiples vetos. Ninguna de las dos opciones es sostenible. La alternativa pasa por consolidar instituciones como la Estrategia Minera, con espacios de deliberación técnica-política y acuerdos mínimos que trascienden los ciclos electorales.

En contextos de polarización, gobernar no significa diluir las diferencias ni renunciar a los proyectos políticos. Significa reconocer que la efectividad del Estado depende cada vez más de su capacidad para operar en red, coordinar actores y aprender de la evidencia. La legitimidad no proviene solo de la victoria electoral, sino del desempeño.

El desafío del nuevo ciclo no es menor: pasar de una política entendida como confrontación permanente a una política capaz de tomar decisiones bajo desacuerdo. No es una tarea épica, pero sí decisiva. En un país diverso y territorialmente complejo, la gobernabilidad del futuro no se medirá por la homogeneidad del poder, sino por la capacidad de gobernar cuando esa homogeneidad no existe.